



## Consejo Económico y Social

Distr. general  
24 de octubre de 2012  
Español  
Original: francés

---

### Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

#### 47º período de sesiones

#### Acta resumida de la 45ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 23 de noviembre de 2011, a las 15.00 horas

*Presidente:* Sr. Pillay

### Sumario

#### Examen de los informes

- a) Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (*continuación*)

*Tercer informe periódico de la Argentina* (continuación)

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

*Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.*

### **Examen de los informes**

#### **a) Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)**

*Tercer informe periódico de la Argentina* (E/C.12/ARG/3; documento básico (HRI/CORE/1/Add.74); observaciones finales del Comité relativas al segundo informe periódico (E/C.12/1/Add.38); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/ARG/Q/3); respuestas por escrito del Gobierno de la Argentina (E/C.12/ARG/Q/3/Add.1) (continuación)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de la Argentina vuelve a tomar asiento a la Mesa del Comité.*

#### *Artículos 6 a 9 del Pacto (continuación)*

2. **El Sr. Texier** desearía saber quién se encarga de la inspección del trabajo en las empresas y cuáles son las atribuciones de los inspectores.
3. **El Sr. Abdel-Moneim** recuerda que el derecho a trabajar, plasmado en el Pacto, es un concepto de mayor amplitud que el derecho al empleo, puesto que el primero comprende la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido. Desearía conocer cuál es la disparidad entre los ingresos obtenidos de los empleos registrados y los obtenidos de los empleos no registrados. Tras dar lectura a los párrafos 23 y 24 del informe objeto de examen, desearía que la delegación especificara qué porcentaje de los edificios nuevos se destina al alquiler. Por último, pregunta de qué forma el paso de una paridad fija a unos tipos de cambio variables en 2002 bastó para mejorar el respeto del derecho al trabajo.
4. **La Sra. Cong** desearía saber cuántos empleos se han creado en el sector agrícola desde 2003 y si el Programa Jefes de Hogar se aplica igualmente a los trabajadores agrícolas desempleados y a los indígenas. Desearía recibir más información sobre las familias ubicadas en una situación estructural más desventajosa, mencionadas en el párrafo 39 del tercer informe periódico, conocer las medidas adoptadas para reducir el número de personas con un trabajo no registrado y saber cuántos trabajadores se han registrado desde 2007, en particular en el sector agrícola.
5. **El Sr. Kedzia** (Relator para la Argentina) pide a la delegación que explique cómo se integra en los contratos y licencias de explotación, especialmente de las industrias extractivas, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y, en concreto, todo lo relacionado con la no discriminación, la remuneración, la seguridad de las condiciones de trabajo y los derechos sindicales.
6. **La Sra. Perceval** (Argentina) explica que la Defensoría del Pueblo es una institución de carácter parlamentario establecida por la Constitución. El Defensor es nombrado por el Congreso, por mayoría de los dos tercios de cada cámara, a propuesta de una comisión bicameral integrada por el mismo número de senadores y de diputados, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes N° 24284 y N° 24379. La Sra. Perceval propone al Comité que en el examen del próximo informe periódico de la Argentina, colaboren algunos parlamentarios. Recuerda que el Defensor del Pueblo ha acompañado a varias organizaciones de derechos humanos en múltiples actuaciones y, en especial, la vinculada a la defensa del medio ambiente en la cuenca del río Matanza-Riachuelo, o la que se llevó a cabo antes de la aprobación en 2008 de la Ley de movilidad jubilatoria, que prevé dos revalorizaciones anuales de las pensiones.

7. **El Sr. Dell'Elce** (Argentina) explica que el derecho a ser consultado y participar está consagrado en la Constitución Nacional (art. 75, párr. 17), así como en muchas constituciones provinciales, que incluyen igualmente las disposiciones del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Existen tres entidades de participación y de consulta, entre las que, la primera, el Consejo de Participación Indígena, creado en 2004, reúne a un centenar de representantes procedentes de más de 30 pueblos y 1.280 comunidades indígenas, elegidos cada tres años por los indígenas y que reciben una ayuda financiera del Gobierno federal. El Consejo de Participación Indígena ha intervenido en la redacción del decreto reglamentario de la Ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, que ordena que en la delimitación de los territorios se garantice la cosmovisión de cada pueblo.

8. El orador explica que el Estado argentino reconoce la propiedad colectiva de esos territorios y el principio de que no se puede delimitar ningún territorio indígena sin que los afectados otorguen previamente su consentimiento, de manera libre y con conocimiento de causa. Ya se han delimitado 5 millones de hectáreas, es decir, el 40% de la superficie. A petición del poder ejecutivo nacional, el Congreso ha decidido que esa Ley se mantendrá en vigor hasta el 23 de noviembre de 2013. Se han aprobado varias garantías para permitir a las comunidades empezar a administrar los recursos naturales que existen en sus territorios. Las autoridades tradicionales de cada comunidad, que deben decidir si aceptan la delimitación de los territorios y las aproximadamente 30 organizaciones territoriales registradas que agrupan a las comunidades, constituyen las otras dos entidades de participación.

9. El Gobierno de la Argentina tiene interés en promover procesos de consulta que permitan velar por el respeto del derecho a la información y a una amplia consulta, previa y obligatoria, el derecho de impedir cualquier medida incompatible con el derecho a la información y a la consulta, el derecho a obtener ventajas económicas de la explotación de los recursos naturales y el derecho a controlar la ejecución, aplicación y evaluación de las actividades. Se han creado unos 40 servicios de asistencia jurídica permanente para las asociaciones indígenas, con miras a hacer valer esos derechos. El Sr. Dell'Elce dice que los fallos de los tribunales son mayoritariamente favorables a las comunidades indígenas, como, por ejemplo, en el caso que opuso en Neuquén, a la compañía de petróleo Piedra del Águila a la comunidad curuinca, en el que el tribunal anuló las licencias de explotación concedidas sin el consentimiento de las comunidades afectadas.

10. Por último, las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales desempeñan un papel de primera magnitud en la delimitación de los territorios puesto que son consultadas y han de verificar que las comunidades otorguen libremente su consentimiento, con carácter previo y conocimiento de causa. Gracias a esa delimitación se aprobará una ley sobre la propiedad colectiva indígena, elaborada junto con los interesados, que incluirá un procedimiento flexible de atribución del título de propiedad colectiva y un fondo especial de indemnización en caso de desalojo para las alrededor de 18 millones de hectáreas afectadas.

11. **El Sr. Labarta Liprandi** (Argentina) insiste en el carácter público de las estadísticas y señala que solo se emprenden acciones judiciales cuando no se ha preservado el anonimato de la persona interrogada. Todo aquel que viole el secreto de las estadísticas garantizado por la Ley N° 17622 de creación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), será castigado con una sanción penal. El INDEC asiste a las reuniones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y tiene en cuenta las recomendaciones formuladas por el Consejo Económico y Social. Por último, el Sr. Labarta Liprandi defiende la transparencia de las estadísticas, en cuya elaboración nadie ha planteado una objeción metodológica o científica y recalca que la transparencia no ha dejado de aumentar desde 2007.

12. **El Sr. Dell'Elce** (Argentina), subraya el carácter federal de la Argentina, por lo que explica que el Gobierno federal ha firmado un acuerdo con 22 provincias en lo tocante a la delimitación de los territorios indígenas. Reconoce que existe un cierto grado de resistencia en las otras dos provincias, pero destaca el compromiso sincero y sin reservas de la Argentina en favor de los derechos humanos. Admite que pueda uno preguntarse por la necesidad de una reforma de la Constitución de 1994 relativa a la descentralización de los poderes en el ámbito de la ordenación del territorio y de la gestión de los recursos naturales, que son ahora competencia de las autoridades provinciales. Sin embargo, la Argentina desea seguir avanzando por la vía del federalismo concertado, gracias al cual ha podido reconocer la personería jurídica de las comunidades autóctonas y conceder títulos de propiedad colectiva para unos 5 millones de hectáreas, lo que podría favorecer la obtención de un consenso sobre la delimitación de los territorios.

13. **La Sra. Carbone** (Argentina) explica que numerosas decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de las jurisdicciones inferiores se basan en las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

14. **El Sr. Ciaravino** (Argentina) indica que la tasa de desempleo de las mujeres se eleva al 8,7%, frente al 6,2% para los hombres, con un promedio del 7,2% y que la tasa media de feminización del trabajo es del 32%. Explica que el trabajo no registrado es la secuela más grave de la aplicación del Consenso de Washington y pone de relieve que, en siete años, el desempleo ha disminuido a un ritmo que duplica el del trabajo no registrado. Ni qué decir tiene que la adopción de tipos de cambio variables no es la única fuente de creación de empleos, tras la política de destrucción de los puestos de trabajo que la Argentina aplicó, de conformidad con el Consenso de Washington. Ha sido solo un cambio de la mentalidad lo que ha permitido a la Argentina salir de esa lógica neoliberal. Ahora, todas las decisiones financieras y de política económica se orientan hacia la creación de empleos, pues, se considera que el trabajo es la piedra angular de la paz social, la ciudadanía y la democracia. La política de promoción de los derechos humanos que el Gobierno de la Argentina está llevando a cabo en la actualidad no podría haberse aplicado bajo el régimen de los militares genocidas, en el que el elemento predominante era la represión. Esa transformación, que no se limita al régimen cambiario, ha facilitado la creación de numerosos puestos de trabajo, aunque persiste una tradición tenaz de irregularidades, heredada de la época en la que no existían normas de protección de los derechos humanos o de los trabajadores. El mantenimiento de los salarios y de las prestaciones sociales a un nivel elevado ha permitido estimular la demanda, la producción y la creación de empleo.

15. Otro ejemplo que ilustra el interés de las autoridades por el empleo es la consolidación de la inspección del trabajo. El número de inspectores del trabajo en Argentina ha pasado de 40 a 400. Mientras que antes, los empleos registrados representaban el 20% de los empleos creados, ese porcentaje asciende ahora al 90%. Los derechos de los trabajadores no registrados no son reconocidos en el ejercicio de su actividad, pero eso no quiere decir que la ley no los proteja. Además, la prestación por hijo está diseñada para los trabajadores en situación irregular. Se han establecido también programas especiales de formación y de inserción profesional con miras a subsanar el trabajo no registrado. Las políticas de empleo implantadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social han sido importantes. En siete años, más de 4.800.000 trabajadores se han beneficiado de los diferentes programas de promoción del empleo y de formación.

16. Para incrementar el poder adquisitivo de la población, ha sido imprescindible reactivar el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (CNEPSMVM), que fija cada año, desde 2003, el salario mínimo vital y móvil, que ronda en la actualidad los 554 dólares de los Estados Unidos y sirve de referencia para los salarios establecidos en los convenios colectivos, que son todos de una cuantía superior,

pues la remuneración media en Argentina se cifra en 2.000 dólares de los Estados Unidos. Los trabajadores domésticos perciben una retribución basada en el salario mínimo vital y móvil, que se ajusta ulteriormente en función de las categorías y al que debe añadirse la cotización mínima a la seguridad social. El programa Jefes de Hogar se ha cancelado, ya que sus beneficiarios, que eran 2 millones de personas, han encontrado otra solución y, en su inmensa mayoría, un puesto de trabajo.

17. El Sr. Ciaravino reconoce que las empresas pueden cometer violaciones de los derechos sindicales y dice que en los tribunales del trabajo, existe un procedimiento acelerado que permite a los trabajadores hacer valer sus derechos sindicales. El Estado no vulnera los derechos sindicales de los trabajadores. En la Argentina hay unas 3.600 organizaciones sindicales y más del 40% de los empleados están afiliados, lo que cuadruplica el promedio europeo.

18. **La Sra. Shin** dice que el cargo de Defensor del Pueblo ha estado vacante, al parecer, durante varios años. Habida cuenta de la importancia que el Comité concede a la función del Defensor del Pueblo, desea saber si ese puesto está ya cubierto. Expresa su preocupación por las informaciones recibidas en torno a las apropiaciones ilegales de tierras de los pueblos indígenas, por lo que indica que el Gobierno debe tomar medidas para prevenir esos abusos.

19. El Comité ha preguntado si alguna ley tipifica el acoso sexual, pero las respuestas escritas del Gobierno argentino no han sido claras a ese respecto. Además, como el 60% del personal del servicio doméstico no está declarado, convendría informar detalladamente de cuáles son los recursos disponibles en caso de acoso sexual, dado que las víctimas se muestran generalmente reacias a acudir a los tribunales.

20. **El Sr. Sadi** destaca la imprecisión de las respuestas aportadas por la Argentina y desea saber si, en las decisiones judiciales en que se ha hecho referencia al Pacto, se han citado debidamente las disposiciones de ese instrumento o si se han limitado a declararlas aplicables, lo que sería insuficiente. La protección de los derechos consagrados en el Pacto, que se enmarca en el mandato del Defensor del Pueblo, sería más difícil sin una jurisprudencia apropiada.

21. **El Sr. Abdel-Moneim** cree entender que el adjetivo "móvil" en la expresión "salario mínimo vital y móvil" significa que ese salario está sujeto a revisiones al alza. Considera que el abandono del sistema de tipos de cambio fijos forma parte igualmente de las políticas de desregulación. Aunque, en términos absolutos, el debate entre la conveniencia de los tipos de cambio fijos y los tipos de cambio variables es un debate interminable, lo más prudente ha sido, en el caso de la Argentina, prescindir de los tipos de cambio fijos.

22. **El Sr. Kedzia** (Relator para la Argentina) pregunta por las medidas de control adoptadas por el Gobierno para garantizar que las empresas respeten los derechos económicos, sociales y culturales. Se ha aportado mucha información sobre las consultas a los pueblos indígenas, pero habría que especificar a qué recursos tienen acceso si las consultas no arrojan resultados satisfactorios. El Sr. Kedzia se declara satisfecho por las informaciones acerca del reconocimiento por el Estado parte de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, por lo que pide detalles sobre el procedimiento de concesión de títulos de la propiedad de esas tierras, ya que el Comité ha recibido quejas en el sentido de que es lento e ineficaz.

23. **El Sr. Tirado Mejía** desea saber si la delimitación de las tierras equivale a la concesión de títulos de propiedad o si el proceso se divide en dos etapas. Desearía igualmente disponer de una información más amplia sobre el proyecto de propiedad comunitaria indígena. ¿Se va a materializar? ¿Se ha presentado al Congreso?

24. **La Sra. Barahona Riera** lamenta que no se haya dado ninguna respuesta a la pregunta que formuló sobre la condición jurídica de la mujer. Se trata de saber si existe una legislación específica sobre la igualdad de los sexos y, en concreto, una tipificación penal del delito de acoso sexual en el lugar de trabajo, la violencia en el hogar y los actos de violencia contra las mujeres en general. Insta a la delegación a que detalle qué tipos de servicios se han implantado para facilitar el acceso de la mujer al mercado de trabajo. Es preciso distinguir entre las ayudas a las que tienen derecho los trabajadores en el contexto de los programas instaurados por el Gobierno, que cambian constantemente y pueden suprimirse de la noche a la mañana y los derechos de los trabajadores a la seguridad social en el marco de la ley. ¿El seguro de desempleo es un derecho reconocido? ¿A qué prestaciones sociales tienen derecho los trabajadores?

25. **La Sra. Perceval** (Argentina) señala que el Defensor del Pueblo, una vez que haya sido elegido por mayoría absoluta de las dos Cámaras del Parlamento, puede proponer los nombres de dos adjuntos. No obstante, al no haber obtenido la mayoría absoluta necesaria para su nombramiento, este será aplazado. Debe ser independiente, al igual que el sistema judicial, actuar con profesionalidad y suscitar la confianza del pueblo. No debe depender del poder político, en cuyo caso sufriría limitaciones en el ejercicio de sus funciones. A largo plazo, se pretende que el pueblo participe en el nombramiento del Defensor.

26. **El Sr. Dell'Elce** (Argentina) dice que el Gobierno se muestra preocupado por la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Hay empresas que se resisten a reconocer los derechos de esos pueblos, pues durante decenas de años han adquirido tierras con la complicidad de las autoridades provinciales. Se han inscrito en el catastro como propietarios de unas tierras reivindicadas por las comunidades indígenas. Esas empresas se asocian para impedir la aplicación de la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, que suspende los desalojos. El Estado argentino acompaña a las autoridades tradicionales y religiosas que proceden a la delimitación de su territorio. Esa delimitación ha dado lugar a algunos enfrentamientos con las empresas y sus sicarios, que han provocado la muerte de varios miembros de las comunidades indígenas. Frente a esa situación el Estado facilita una asistencia judicial a las comunidades indígenas y ha ampliado el alcance de la prohibición de desalojar de las tierras a las comunidades agrícolas no indígenas. Las comunidades indígenas ocupan terrenos que pertenecen al Estado, a las provincias, a las universidades y a las iglesias. Se han realizado grandes avances en la cesión directa a las comunidades indígenas de títulos de propiedad de terrenos pertenecientes al Estado, a las provincias o a las comunas. No ocurre lo mismo con las tierras que pertenecen a propietarios privados inscritos en el catastro. En esos casos, las comunidades pueden acudir a la justicia para obtener un título de propiedad comunitaria por decisión judicial, que prevalece sobre la inscripción en el catastro. Muchas comunidades han utilizado ese procedimiento con éxito. La otra posibilidad es esperar a la entrada en vigor de la ley sobre la propiedad comunitaria, elaborada por representantes electos de las organizaciones indígenas territoriales y por el Consejo de Participación Indígena, que la Presidenta de la República tiene previsto que sea aprobada por el Congreso, al igual que la ley de protección al dominio nacional.

27. El orador indica que, a pesar de que la delimitación de las tierras sea un trabajo difícil, que se efectúa bajo las amenazas y el hostigamiento permanentes de los adversarios, constituye un reconocimiento de la propiedad indígena de las tierras afectadas, de conformidad con el párrafo 17 del artículo 75 de la Constitución argentina. Hay otros medios para restituir a las comunidades expoliadas sus títulos de propiedad, como son la expropiación o la adquisición directa de tierras. Los gobiernos neoliberales aplicaron una estrategia de desmantelamiento, atribuyendo a particulares títulos de propiedad de las tierras de las comunidades, mientras que el Gobierno actual favorece un proceso de reconstitución de la identidad y de la conciencia comunitaria, pese a la resistencia de ciertas empresas y autoridades locales. El proceso de consulta a las comunidades indígenas

afectadas, antes de ponerse en marcha actividades extractivas, ha obtenido en ciertos casos resultados positivos, pero ha sido imposible de organizar en otros. Se han interpuesto denuncias y se han abierto actuaciones judiciales. Se han interrumpido numerosos proyectos a raíz de la intervención de las poblaciones indígenas y es perfectamente posible que el proyecto de Salinas Grandes sea objeto también de una suspensión. La Argentina se está preparando para recibir la visita del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y le llevará a recorrer ocho emplazamientos en los que se haya podido violar el derecho a la consulta.

28. **La Sra. Perceval** (Argentina) dice que las instituciones encargadas de las políticas en pro de la igualdad de las mujeres han experimentado una evolución considerable. La responsabilidad de la tarea recae hoy sobre el Consejo Nacional de la Mujer bajo los auspicios del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se están articulando iniciativas encaminadas a crear un instituto de la mujer, con miras a velar por la integración de las cuestiones de paridad en la elaboración y aplicación de todas las políticas.

29. En cuanto al acoso sexual, se han presentado proyectos para tipificarlo como delito en el Código Penal argentino, pero no cabe hablar tampoco aquí de vacío jurídico para referirse a los actos de violencia contra la mujer. La violencia familiar se considera actualmente un delito común y como tal está sancionado. La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y en las relaciones interpersonales es aplicada por todos los poderes del Estado: existe así una Oficina de Violencia Doméstica en la Corte Suprema de Justicia. Las disposiciones de esa Ley se inspiran en los instrumentos internacionales, pero también en el Consenso de Quito y han tomado en consideración todas las formas de violencia contra la mujer, y entre otros, los actos de violencia en el mundo del trabajo.

30. Las asociaciones de mujeres han realizado campañas de seguridad dirigidas a concienciar a los agentes de las fuerzas del orden respecto de los actos de violencia que se cometen contra ellas. La Subsecretaría de Derechos Humanos, de la que se encarga la Sra. Perceval, ha diseñado una formación virtual sobre la conducta que deben adoptar frente a las víctimas. El Ministerio del Interior ha creado un servicio para abordar las cuestiones relativas a la igualdad de los sexos en las políticas de seguridad. La oradora añade que algunas mujeres han constituido un grupo parlamentario en el Senado a fin de velar por que en todas las políticas se tengan en cuenta las cuestiones de igualdad de género. De este modo, se ha incorporado esa perspectiva a la Ley de servicios de comunicación audiovisuales y a la Ley de educación nacional y se han podido elaborar las Leyes de educación sexual o de promoción de la salud sexual y de la procreación responsable. Se trata de disposiciones concretas, que se aplican a pesar de la resistencia de ciertos sectores. En cuanto al feminicidio, se va a examinar un protocolo de acción en el marco del MERCOSUR y se ha presentado a las dos Cámaras un proyecto de ley sobre la tipificación de ese delito.

31. Pasando a los trabajadores del servicio doméstico, que son alrededor de 1 millón en la Argentina, la Presidenta de la República ha solicitado que se regule dicho trabajo en los domicilios particulares, pues los trabajadores domésticos, fundamentalmente mujeres, carecen a menudo de derechos y prestaciones sociales. En la Cámara de los Diputados se está examinando en la actualidad un proyecto de ley y la Subsecretaría de Derechos Humanos ha organizado, junto con otros ministerios, una campaña en pro de su aprobación por el Senado. Es indispensable contar con un apoyo social para esos proyectos, ya que a veces entran en conflicto con costumbres y prácticas admitidas por la sociedad.

32. **El Sr. Texier** explica que la Ley N° 23551 ha suscitado una fuerte oposición de la OIT, debido a que contraviene lo dispuesto en el Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Esta Ley puede considerarse incompatible con el artículo 8, párrafo 3 del Pacto, dado que establece dos clases de sindicatos: los que están

registrados y los que no lo están. Como los dos tipos de sindicatos no tienen las mismas atribuciones, el orador estima que se trata de una discriminación a nivel del Estado. Además, habida cuenta de ciertas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que considera, en particular, que el tiempo necesario para la concesión de pensiones de jubilación o de prestaciones sociales es demasiado largo, el orador opina que es preciso cambiar la ley o la práctica.

*Artículos 10 a 12 del Pacto*

33. **El Sr. Ribeiro Leão** hace referencia a la crisis de confianza que afecta a la economía argentina y que se ha traducido en estos últimos años por la fuga masiva de capitales. Numerosos especialistas estiman que la economía seguirá estancada mientras no se resuelva esa crisis de confianza. Además, parece ser que uno de cada tres argentinos es pobre, es decir del 32% al 35% de la población, mientras que la cifra ofrecida por el Gobierno argentino es del 15%. El Ribeiro Leão pregunta cuál es la tasa oficial de pobreza en la Argentina. ¿Qué hace el Estado para luchar contra la crisis de confianza generalizada y cómo debería ayudarle la comunidad internacional a combatir la pobreza?

34. **El Sr. Riedel** pregunta si el hecho de que la Argentina no haya ratificado aún el Convenio Marco internacional de la OMS para el control del tabaco se debe a la oposición de los Estados federados. Recuerda, sin embargo, que la Argentina no puede invocar su condición de Estado federal para sustraerse a sus obligaciones internacionales. Pregunta cuáles son las medidas tomadas a nivel federal para modificar la situación, a sabiendas de que la tasa de prevalencia del consumo de tabaco es una de las más elevadas de América Latina.

35. El Sr. Riedel desearía conocer las medidas que se han adoptado para despenalizar el aborto, ya que los abortos clandestinos provocan muchas muertes en el país. Desearía saber cómo se aplica en las escuelas el programa de educación sexual, que permitiría reducir el número de embarazos de las adolescentes. Las autoridades locales se muestran reacias, al parecer, a su aplicación, debido a las presiones de la Iglesia católica.

36. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la tasa de morbilidad por enfermedades cardiovasculares y transmisibles en la Argentina es elevada. El Sr. Riedel pregunta qué medidas se han tomado para reducir el elevado porcentaje de esos pacientes y para que los medicamentos esenciales estén a disposición de todos y, en particular, de los grupos más desfavorecidos de la población, como los indígenas. Desearía conocer igualmente las primeras evaluaciones que se han hecho a raíz de la entrada en vigor de la Ley de salud mental de la Argentina.

37. El Sr. Riedel pide más detalles sobre la asistencia sanitaria que se presta en las cárceles y en las comisarías de policía, donde según las informaciones, reina la falta de higiene y de atención médica, así como los actos de violencia recurrente. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar que los sospechosos no se vean privados de libertad más tiempo del necesario?

38. **El Sr. Schrijver** observa que, según las estadísticas, se han realizado progresos en los diez últimos años, en lo que respecta a la prohibición del trabajo infantil. Pregunta cuál es la valoración de la situación por el Gobierno argentino en esa esfera. Con arreglo a los informes, en las zonas rurales un niño de cada tres entre los 14 y los 17 años trabaja todavía y uno de cada cinco en las zonas urbanas. Muchos niños de 13 años o menos trabajan también, fundamentalmente en las zonas rurales. El orador pregunta si el Pacto, que la Argentina ha firmado y que prohíbe el trabajo de los niños, goza de una amplia difusión. Recuerda la Declaración formulada por el Comité en 2001 sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos económicos, sociales y culturales (E/C.12/2011/1). La Argentina ha firmado los Convenios de la OIT N° 131 sobre

la fijación de salarios mínimos y N° 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, pero su aplicación deja mucho que desear.

39. En cuanto a los niños víctimas de la trata, se ha redactado un Plan de prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, pero el Comité se ha percatado de que las entidades encargadas de su aplicación son insuficientes, de que no hay mecanismos eficaces de coordinación y de que las medidas tomadas a nivel provincial no son inadecuadas. El Sr. Schrijver pregunta qué disposiciones se han adoptado para mejorar la situación.

40. **La Sra. Shin** estima que, aunque el país esté en la actualidad en condiciones de ampliar la seguridad social a las personas desfavorecidas, las mujeres pobres o los indígenas, gracias a la prosperidad económica de estos últimos años, el porcentaje de barrios marginales ha aumentado en las ciudades y en algunas regiones las condiciones de saneamiento son limitadas. Desea saber qué prevé el Gobierno para que las personas vulnerables puedan disfrutar de un nivel de vida digno. En lo que se refiere al tabaco, pregunta cómo piensa la Argentina, que no ha ratificado el Convenio Marco internacional para el control del tabaco, luchar contra esa adicción, particularmente elevada entre las jóvenes y las adolescentes. Pone de relieve que la Ley de educación sexual integral sigue sin aplicarse en las provincias y desearía conocer las medidas tomadas para garantizar su aplicación.

41. **El Sr. Abdel-Moneim**, en lo tocante al derecho a una alimentación adecuada, dice que la Argentina, que es uno de los principales exportadores de cereales, debe adoptar las medidas necesarias para asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales, como lo exige el artículo 11 del Pacto. Desearía saber si la Argentina ha establecido un índice de precios al consumo, que permitiría ajustar el salario mínimo a las fluctuaciones de los precios de los productos de consumo. Por último, pide más detalles acerca del impuesto sobre la renta y los impuestos indirectos, especialmente en el ámbito del consumo.

42. **La Sra. Barahona Riera** pregunta si, se han tipificado como delitos la violencia familiar, el acoso sexual y el feminicidio y en qué medida la Ley de creación del Programa Nacional de salud sexual y procreación responsable y la Ley de educación sexual integral, ambas progresistas, se aplican en todo el país, sin olvidar las regiones más conservadoras. Recuerda que el Estado parte tiene la obligación de velar por el respeto de la Ley de educación sexual en todos los centros escolares del país, y entre ellos, en las escuelas privadas. La delegación argentina podría dar a conocer el número de abortos practicados cada año y la relación entre mortalidad materna y abortos clandestinos y especificar en qué circunstancias está prohibido el aborto y puede dar lugar a un procedimiento penal.

43. En cuanto al acceso a las prestaciones sociales, la oradora desearía saber si las personas que no han cotizado pueden solicitar una pensión de jubilación o prestaciones por desempleo y si las prestaciones familiares por hijo a cargo son universales. La delegación de la Argentina podría indicar si la cobertura del sistema de salud es universal y si todos pueden acceder gratuitamente a los medicamentos esenciales.

44. **El Sr. Tirado Mejía** pregunta qué disposiciones concretas ha tomado el Estado parte para combatir el narcotráfico a todos los niveles, tanto en los países productores como en los países de destino, en las etapas de financiación y de blanqueo del dinero de la droga, desde la producción hasta el consumo. En ese sentido desearía saber si en el Estado parte se sanciona la toxicomanía y, más específicamente, si los consumidores y los poseedores de droga se arriesgan a la cárcel y si la posesión de una pequeña cantidad de estupefacientes para el consumo personal se tolera o no. ¿Se considera que la toxicomanía es un problema médico?

45. **El Sr. Abashidze**, tras señalar que la cuarta parte de los jóvenes argentinos fuma, pregunta si el Estado parte ha previsto ratificar el Convenio Marco para el control del

tabaco, que firmó en 2003, y aprobar una ley nacional que recoja, a grandes rasgos, sus disposiciones.

46. **La Sra. Shin** se congratula del excelente nivel de protección de la maternidad y los cuidados neonatales implantados por el Estado parte, que ofrece una cobertura médica a todas las embarazadas, al margen de que hayan cotizado o no con anterioridad, así como a los niños hasta la edad de 6 años. Pregunta si ese sistema de prestaciones de atención de salud se ha facilitado a toda la población, mediante la implantación de servicios de proximidad en todos los hospitales y dispensarios del país, así como en las zonas rurales y si en las regiones más remotas del país los pacientes cuentan con un servicio a domicilio de médicos y enfermeras.

47. **El Sr. Texier** pregunta si las provincias en que se registran unas tasas de embarazo precoz más elevadas, como el Chaco, son también las que se oponen más enérgicamente a la aplicación de los programas de educación sexual en las escuelas. Como ha oído decir que el reciente asesinato de dos jóvenes francesas en el Estado parte podía quizá no ser un caso aislado, sino, por el contrario, el reflejo de un cierto desprecio a la mujer en la sociedad argentina, desearía saber si, según la delegación de ese país, el Estado parte podría convertirse en un escenario de feminicidios como otros países de la región.

48. **El Sr. Kedzia** desearía conocer las medidas tomadas por el Estado parte para paliar el déficit de viviendas que afecta tanto a las zonas urbanas como a las rurales, en especial en el seno de las comunidades indígenas y saber si el Estado parte ha logrado atajar el fenómeno de los niños de la calle desde la presentación de su segundo informe periódico. Por último, tras subrayar que la cuestión de las migraciones ha cobrado una envergadura mundial, desearía saber qué derechos y qué protección, según el Estado parte, deberían concederse a los migrantes.

49. **El Presidente**, tomando la palabra en su calidad de miembro del Comité, pregunta si el Estado parte ha aprobado una legislación que se ajuste a las disposiciones de la Observación general N° 7 (1997) del Comité relativa al derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzados, y si, por regla general, los afectados son realojados o indemnizados. Añade que la mayoría de los habitantes de los barrios marginales insalubres corren más riesgo de ser desalojados por la fuerza y desearía, por tanto, conocer el alcance del fenómeno de las personas sin vivienda en el Estado parte, en particular en las ciudades.

#### *Artículos 13 a 15*

50. **El Sr. Kerdoun** señala que el Estado parte tropieza con el problema crónico de los alumnos repetidores y de la presencia de alumnos de mayor edad que la normal en el sistema educativo, por lo que desearía saber por qué y cómo el Estado parte ha llegado a una situación tan crítica. Lamenta, además, que muchos adolescentes indígenas pobres abandonen sus estudios a pesar de percibir unas becas destinadas a mantenerlos dentro del sistema escolar. Se pregunta, por tanto, qué va hacer el Estado parte para asegurar el futuro de todos los jóvenes que no están escolarizados, como por ejemplo, orientarlos hacia una formación profesional o ayudarlos a integrarse en el mercado de trabajo. El Sr. Kerdoun agradecería, por otra parte, recibir más información sobre las medidas tomadas en pro de la integración en la enseñanza tradicional de los niños con discapacidad, que, en un 25% de los casos quedan excluidos.

51. Teniendo en cuenta que el artículo 4 de la Ley N° 26206 de educación nacional dispone que "el Estado, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos(as) los(as) habitantes de la región, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad del ejercicio de este derecho", la delegación de la Argentina podría explicar por qué tantos alumnos se quedan al margen del sistema educativo e indicar claramente cuál es

la duración del período de escolarización obligatoria y la edad en que esta concluye. En referencia a la conflictividad que caracteriza cada vez más a la convivencia escolar, así como al Programa Nacional de Mediación Escolar, descritos en los párrafos 833 y siguientes del informe objeto de examen, el Sr. Kerdoun desearía saber si los actos de violencia en el marco de la escuela están motivados por el origen étnico de los alumnos o por otros factores y qué medidas se propone tomar el Estado parte para paliar ese problema. Por último, insta a la delegación de la Argentina a indicar cuál es la tasa de analfabetismo en el país, tanto entre la población en general como entre la población indígena y aportar datos estadísticos sobre esa lacra, desglosados por grupos de población y por sexo.

52. **El Sr. Ribeiro Leão** solicita más detalles sobre el plan de Secundaria para todos, destinado a garantizar una enseñanza de ese nivel a todos los alumnos y desearía, en concreto, conocer el contenido del plan de estudios, que parece basarse en actividades deportivas y artísticas y prever el seguimiento de los alumnos por tutores, así como los resultados específicos de ese plan.

53. **El Sr. Dasgupta** pone de relieve que, aunque la enseñanza sea obligatoria a nivel primario y secundario y el Estado parte haya adoptado un programa nacional titulado "Todos a estudiar", con miras a integrar a los que, por diversos motivos, hayan abandonado sus estudios o no hayan tenido nunca acceso al sistema escolar, parece ser que el derecho a la educación no está garantizado en la práctica, ya que el 14,2% de los mayores de 15 años han abandonado la escuela antes de terminar la enseñanza primaria. Señala que las estadísticas que figuran en el informe objeto de examen se remontan a 2001 y que, desde entonces, se han tomado muchas disposiciones en la esfera de la educación, por lo que pide datos actualizados al respecto, que le permitirían evaluar los progresos realizados, así como la eficacia de las medidas adoptadas para soslayar las lagunas del sistema educativo.

54. **El Sr. Marchán Romero** desearía saber si ya se ha dado en la práctica el caso de que los beneficios obtenidos de la explotación económica de los recursos naturales ubicados en las tierras de los indígenas reviertan en las comunidades de estos últimos propietarios de dichas tierras y si el Estado parte es consciente de la importancia de la dimensión espiritual y cultural que revisten para los indígenas sus tierras ancestrales y lo tiene en cuenta a la hora de reconocer los derechos sobre las tierras de los indígenas y la delimitación de sus territorios. El Sr. Marchán Romero pide, además, datos recientes, con fines de comparación, sobre el número de personas que se autodefinen como indígenas en el Estado parte y el número de personas identificadas como tales por el Estado. Destaca con agrado que el porcentaje de personas que se declaran indígenas está aumentando en la Argentina, lo que no es el caso en los demás países de la región. Ruega a la delegación de la Argentina que indique si la Ley de propiedad intelectual consagra un capítulo entero a la protección de las tradiciones culturales de los pueblos indígenas y cite casos concretos en los que el progreso científico y técnico haya contribuido a mejorar su situación y el bienestar de la población.

*Se levanta la sesión a las 18.00 horas.*